



GD-F-008 V.9

Página 1 de 7

**RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010001615 DEL 01/02/2017**

**“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”**

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO**

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20111300032265 de 2011, la Ley 1437 de 2011 y,

**CONSIDERANDO:**

**1. ANTECEDENTES**

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual “*se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones*”, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que “*La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007*”.

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20111300032265 del 21 de octubre de 2011, delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo entre, otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con el Decreto 1077 de 2015; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el Municipio de MONTERÍA del Departamento de CÓRDOBA, es de categoría 2 y como no fue prestador directo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2015, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20164010054825 del 30 de septiembre de 2016, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al Municipio de MONTERÍA del Departamento de CÓRDOBA, por no haber cumplido el siguiente requisito previsto en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015:

*“Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complementa o sustituya.”*

La Resolución No. SSPD 20164010054825 del 30 de septiembre de 2016, se notificó por aviso el 6 de diciembre de 2016.



El Municipio de MONTERIA mediante el documento radicado en esta entidad bajo el número SSPD 20165290856822 del 15 de diciembre de 2016, presentó oportunamente recurso de reposición en contra de la citada resolución.

## 2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y PRUEBAS APORTADAS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN

2.1 Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

### **"II SUSTENTACIÓN DEL RECURSO**

1. En razón a la decisión de DESCERTIFICAR al Municipio de Montería en términos de la RESOLUCION No. SSPD-20164010054825 DEL 30/09/2016 con fundamento en el mentado acto administrativo el cual menciona, que:

*"A su vez, el ente territorial reporto el Acuerdo 009 del 27 de abril de 2016 que no puede ser tenido en cuenta para acreditar el presente requisito por no haberse proferido para la vigencia 2015."*

2. Ante dicha consideración, debe manifestarse que no es de recibo el reparo expuesto por cuanto al tenor de lo consignado en el parágrafo 1° del artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, se expone lo siguiente:

*Parágrafo 1°. Los factores de subsidios y contribuciones aprobados por los respectivos Concejos Municipales **tendrán una vigencia igual a cinco (5) años**, no obstante estos factores podrán ser modificados antes del término citado, cuando varíen las condiciones para garantizar el equilibrio entre subsidios y contribuciones.*

3. Frente a lo mencionado, cabe precisar que la vigencia del Acuerdo Municipal 012 del 25 de Mayo de 2012, que trata sobre el tema de los factores de subsidios y contribuciones aprobados por el respetivo concejo municipal de Montería tiene una vigencia de 5 años, en términos de la citada ley.

4. Por ello no es pertinente, como se expuso en la resolución reprochada, que NO se cumplió con el requisito del reporte para efectos de que se decrete y se aplique una medida tan restrictiva como es la descertificación para el Municipio de Montería, cuando se expresa en dicha resolución que si se cargo al SUI la información objeto de evaluación, para acceder a la certificación.

5. Es así como, las consideraciones empleadas por su despacho para no aceptar los porcentajes fijados en el Acuerdo Municipal No. 012 de 2012, los cuales fueron aprobados por el Honorable Concejo de Montería, bajo el entendido de que existe equilibrio entre los subsidios y las contribuciones, toda vez que los valores recaudados por concepto de contribuciones es suficiente para atender los subsidios otorgados.

6. Situación que se evidenciada con la expedición del Decreto No. 0334 de 2013 por medio del cual, el ente territorial reglamento el referido Acuerdo Municipal No. 012 del 25 de mayo de 2012 en lo que toca a la aplicación del cobro de dicha contribución y se menciona que existe un balance en la ecuación financiera entre subsidios y contribuciones, razones para justificar que en términos del Acuerdo Municipal No. 012 del 25 de mayo de 2012 se tengan consignado valores inferiores a los mínimos establecido para los servicios ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO y para el servicio de ASEO el establecido en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011.

7. Desconociendo que el Municipio de Montería da aplicación a la garantía de reservar el mínimo del quince por ciento (15%) de los recursos del Sistema General de Participaciones en lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento básico, con destino a garantizar la aplicación de los subsidios a los estratos subsidiables, sustentándose de esta manera el equilibrio de que trata el aludido balance.

8. Debe mencionarse que la medida decretada, consistente en la DESCERTIFICACIÓN del Municipio de Montería es excesiva, cuando la expedición del Acuerdo Municipal para la determinación de los porcentajes es de competencia exclusiva de los concejos municipales y no del ejecutivo municipal para efectos de proceder a su ajuste inmediato, dejándonos a merced de la corporación -Concejo Municipal de Montería- en aprobar o no dicha reglamentación, como fue lo ocurrido en nuestro caso para la vigencia 2015.

9. Sin embargo dicha instancia esta subsanada con la entrada en vigencia del Acuerdo Municipal No. 009 de 2016 que ajusto los porcentajes de contribución de conformidad con los mínimos dispuestos en la Ley 1450 de 2011, ante la gestión de presentar el proyecto de acuerdo por esta administración ante el concejo municipal que concluyo con su aprobatoria, como se desprende del Acuerdo Municipal No. 009 del 27 de abril de 2016.

10. Es por ello, que debe mencionarse que no se nos puede castigar por lo imposible, máxime si la administración municipal en la vigencia 2015 presento en dos (02) ocasiones a consideración del concejo municipal de montería el proyecto de acuerdo para ajustar en términos del artículo 125 de la Ley 1450 de 2011 los porcentajes de contribución, radicaciones de fecha 06 de Junio de 2015 y 12 de Noviembre de 2015, proyectos de acuerdo que terminaron en ambas ocasiones con ponencia negativa, como hecho desencadenante de la Descertificación, materia del presente reproche; documentos que se adjuntan con fines probatorios.

11. Por lo cual resulta evidente que, el ente territorial, adelanto las gestiones necesarias para que los factores de Contribución fueran ajustados en términos del artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, sin mediar responsabilidad de nuestra parte ante la aparente omisión que refiere la resolución y que hoy es cuestionada mediante el presente documento, sumado a la vigencia del Acuerdo Municipal 012 del 25 de Mayo de 2012, como justificación de cobro por parte de los operadores de los servicios públicos domiciliarios para los residenciales en estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

12. Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", y que en sus artículos 43 y 74, consagra, respectivamente, que "Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación", y que "Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: (...)1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque".

## 2.2. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con el radicado bajo el No. 20165290856822 del 15 de diciembre de 2016, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se allegaron los siguientes documentos para que fueran tenidos en cuenta como pruebas:

2.2.1. Decreto No. 334 del 2013, por el cual se reglamenta la aplicación del Acuerdo No. 012 del 2012.

2.2.2. Proyecto de acuerdo por el cual se modifican los porcentajes de contribuciones establecidas en el Acuerdo No. 012 del 2012, de abril del 2015.

2.2.3. Proyecto de acuerdo por el cual se modifican los porcentajes de contribuciones establecidas en el Acuerdo No. 012 del 2012, de noviembre del 2015.

## 3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta Superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

**Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el "Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya."**

El Municipio de Montería incumplió éste requisito, debido a que cargó en el SUI el Acuerdo Municipal No. 012 del 25 de mayo del 2012, pero este no respetó el porcentaje mínimo de contribución establecido en la norma para para los estratos 5, 6 y el uso comercial de los servicios de acueducto y alcantarillado; asimismo, se verificó que el ente territorial también reportó el Acuerdo Municipal No. 009 del 27 de abril del 2016, pero este no fue expedido, ni aplicado para la vigencia evaluada (es decir el año 2015).

Al respecto manifiesta el recurrente, que no es de recibo la aseveración de que no se cumplió con el requisito bajo estudio, ya que si se cargó en el SUI la información objeto de evaluación para acceder a la certificación.

Además menciona, que el valor recaudado por concepto de contribuciones es suficiente para atender los subsidios otorgados y que por tal razón se expidió el Decreto No. 0334 de 2013 por medio del cual se

reglamentó el referido Acuerdo Municipal No. 012 del 25 de mayo de 2012, en lo atinente a la aplicación del cobro de las contribuciones.

Por estas razones, considera el recurrente que la descertificación es excesiva cuando la expedición del acuerdo municipal para la determinación de los porcentajes es de competencia exclusiva de los concejos municipales y no del ejecutivo municipal, pero que sin embargo dicha materia esta subsanada con la entrada en vigencia del Acuerdo Municipal No. 009 de 2016, que ajustó los porcentajes de contribución de conformidad con los mínimos dispuestos en la Ley 1450 de 2011.

Finalmente, indica que no se puede castigar al ente territorial por lo imposible, máxime si la administración municipal en la vigencia 2015 presentó en dos ocasiones a consideración del Concejo Municipal de Montería, el proyecto de acuerdo para ajustar en términos del artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, los porcentajes de contribución, proyectos que terminaron con ponencia negativa, como hecho desencadenante de la descertificación.

Pues bien, de cara a los argumentos expuestos por el municipio recurrente, este Despacho procedió a verificar lo consignado en la resolución que se impugna, encontrando que efectivamente el Municipio de Montería reportó en el SUI los Acuerdos Municipales Nos. 012 del 25 de mayo del 2012 (Imagen 1) y 009 del 27 de abril del 2016 (Imagen 2), como se observa a continuación:



## ACUERDO 012 DE 2012

25 MAY 2012

**POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN Y APRUEBAN LOS PORCENTAJES PARA SUBSIDIAR A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 EN EL PAGO DE LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.**

### EL HONORABLE CONCEJO DE MONTERÍA

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales y en especial las que le confiere el Artículo 358 de la Constitución Nacional, la Ley 138 de 1994 y en cumplimiento de la Ley 142 de 1994, Ley 632 de 2000 y Decreto Nacional 1013 de 2005.

### ACUERDA:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Las empresas que prestan los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio de Montería, aplicarán los siguientes factores de subsidio a las tarifas a partir de los consumos del mes de Enero a Diciembre de 2012, de conformidad con lo establecido en la Ley 142 de 1994, sin que dichos subsidios excedan, en ningún caso, el valor de los consumos básicos o de subsistencia:

ESTRATO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
	Consumo Básico	Consumo Básico	Consumo Básico
Estrato 1	57%	55%	20%
Estrato 2	40%	40%	10%
Estrato 3	15%	15%	0%

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Las empresas prestadoras de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio de Montería, aplicarán los siguientes Factores de Contribución, a partir de los consumos del mes de enero de 2012, a las tarifas de los usuarios residenciales de los Estratos 5 y 6, Industriales y Comerciales, de conformidad con lo establecido en las Leyes 142 de 1994, 632 de 2000 y Decreto Nacional 1013 de 2000.

ESTRATO	SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
	SERVICIO DE ACUEDUCTO	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	SERVICIO DE ASEO
ESTRATO 5	40%	33%	50%
ESTRATO 6	41%	35%	60%
COMERCIAL	41%	35%	60%
INDUSTRIAL	41%	35%	60%

Imagen No. 1

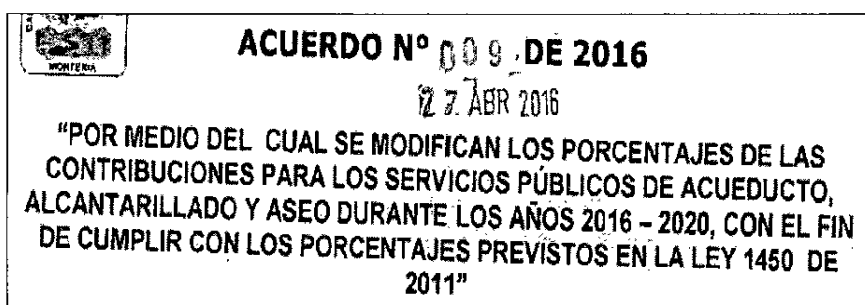


Imagen No. 2

Sea lo primero advertir que, a través de la estratificación se clasifica a la población según sus condiciones socio-económicas, a efectos de permitir que la redistribución del ingreso y el principio de solidaridad que deben imperar en el régimen de tarifas para los servicios públicos domiciliarios se cumplan efectivamente (artículo 367 de la Constitución). La Ley 142 de 1994 en este caso, hace uso de este mecanismo para determinar qué sectores de la población deben además pagar los costos propios de los servicios públicos de los cuales son usuarios, asumir un pago extra, a fin de colaborar con ese otro sector de la población que no tiene los recursos suficientes para cubrir los costos reales de estos servicios.

En este orden de ideas, la Ley 1450 del 16 de junio del 2011, determinó unos porcentajes máximos de subsidios y mínimos de contribuciones que los municipios deben observar a la hora de expedir el acto administrativo, además de señalar que dichos factores aprobados por los respectivos Concejos Municipales tendrán una vigencia igual a cinco años.

No obstante en el presente asunto, el Acuerdo Municipal No. 012 del 25 de mayo del 2012 fijó un porcentaje de aporte solidario para los estratos 5, 6 y el uso comercial de los servicios de acueducto y alcantarillado, que no atiende el mínimo señalado por la ley, tal como se observa en la imagen No. 1; adicionalmente, resulta pertinente precisar que el Municipio de Montería reportó contar con predios en dichos estratos y en el uso comercial en el REC 1A 2015, así:

COBERTURAS CON SOLUCIONES PARTICULARES									
RESIDENCIAL									
	TOTAL Residencial	Estrato 1	Estrato 2	Estrato 3	Estrato 4	Estrato 5	Estrato 6	No Estratificado	
TOTAL MUNICIPAL	Número Total de predios	86374	60521	13600	5683	3054	2286	1150	NO
	Número de Predios con acceso al servicio	74806	49386	13287	5659	3050	2284	1140	NO
	% Cobertura Usuarios	86.61	66.02	17.76	7.56	4.08	3.03	1.52	NO

NO RESIDENCIAL							
TOTAL MUNICIPAL		TOTAL NO Residencial	Comercial	Industrial	Oficial	Servicios	Otros
	Número Total de Predios	58231	10160	239	627	307	46898
	Número de Predios con acceso al servicio	17077	10152	239	626	304	5756
	% Cobertura Usuarios	29.33	59.45	1.4	3.67	1.78	33.71

Ahora bien, el Decreto 1077 del 2015, dispone que el requisito en discusión se cumple sí y solo sí, el ente territorial reporta en el SUI "(...) el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011". (Subrayado fuera de texto).

Por su parte, la citada Ley 1450 de 2011 establece en su artículo 125, que "Los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a que hace referencia el artículo 2° de la Ley 632 de 2000 serán como mínimo los siguientes: **Suscriptores Residenciales de estrato 5: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Residenciales de estrato 6: sesenta por ciento (60%); Suscriptores Comerciales: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Industriales: treinta por ciento (30%).**" (Subraya fuera del texto)

Así las cosas, es claro que el Acuerdo Municipal No. 012 del 25 de mayo del 2012, no satisface el requisito en discusión, como quiera que no fue expedido de conformidad con la Ley 1450, condición que la norma demanda para acreditar el requisito relacionado con el acto administrativo que regula el porcentaje de subsidios y contribuciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo a las actuaciones del Municipio en torno al incumplimiento de la ley, no se presentó un cambio sorpresivo, abrupto e inesperado en la normatividad que regula los porcentajes de subsidios y contribuciones, que no fuese previsible para que la administración municipal tomara las medidas convenientes y oportunas que concordaran con lo fijado en la ley.

Cabe anotar sobre este punto, y dando respuesta a lo argumentado en el escrito de reposición, que el nuevo Acuerdo Municipal No. 009 del 27 de abril 2016, **no rigió para el año 2015** (vigencia la cual se evalúa en el presente proceso de certificación), razón por la que dicho acuerdo no puede ser objeto de análisis en el presente recurso, ya que el mismo surte efectos desde 2016 a 2020, como lo determina el mismo acuerdo sus artículos primero y quinto. De esta forma, es indiscutible que el mismo no rigió para el año 2015, lo cual permite concluir al Despacho que en la vigencia evaluada (2015) no hubo un acto administrativo que regulara lo concerniente a los porcentajes de aporte solidario, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

De otra parte, y en respuesta a los argumentos expuestos en el escrito de reposición, resulta pertinente recordarle al recurrente que el sujeto del proceso de certificación que nos ocupa es precisamente el municipio y que el Concejo Municipal es una corporación que hace parte de este. De esta manera, para lograr la certificación, se debe dar cumplimiento a los requisitos dispuestos en la norma en su forma y términos, obligación la cual radica en cabeza del municipio como tal y no únicamente en la administración municipal, ya que su labor es mancomunada y se supedita a la ley.

Al respecto esta Superintendencia se ha pronunciado en el siguiente sentido:

Concepto 749 del 9 de septiembre del 2014:

*"(...) las funciones de los alcaldes y de los concejos municipales y distritales, aunque son complementarias, se encuentran delimitadas, pues mientras se encuentra a cargo de los alcaldes, definir los criterios con los cuales deberán asignarse los recursos destinados a sufragar los subsidios, corresponde a los cuerpos colegiados otorgar los subsidios y determinar el porcentaje de aporte solidario necesario para equilibrar el valor faltante entre subsidios y contribuciones.*

*De conformidad con lo anterior, la labor a cargo de las autoridades municipales o distritales, esto es, de los alcaldes y concejos municipales en este aspecto, es una labor mancomunada, que requiere de la participación conjunta de los dos actores, dentro de los deberes funcionales que la constitución y la ley, ha otorgado a cada uno de ellos.*

*(...)*

*En este orden de ideas es dable concluir, que tanto los Concejos municipales como los Alcaldes municipales o distritales, tienen establecidas sus funciones en la Constitución y en la ley, motivo por el cual, sus actuaciones deben sujetarse a las mismas, sin que les sea dable asumir funciones que no les corresponde, máxime si tomamos en consideración el hecho, de que se trata de las autoridades que ostentan la mayor jerarquía en estos entes territoriales.*

*Sobre el particular y para terminar, es importante traer a colación el contenido del artículo 6° de la Constitución Política, que señala: "Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones", previsión que debe ser atendida no solamente por los servidores públicos, sino de manera primordial por las autoridades administrativas."*  
(Subrayado fuera de texto)

De conformidad con lo desarrollado, se desvirtúa el argumento del recurrente, según el cual la medida de descertificación es excesiva porque la expedición del Acuerdo Municipal para la determinación de los porcentajes es de competencia exclusiva de los concejos municipales y no del ejecutivo municipal, toda vez que si bien es cierta su apreciación sobre la competencia, se reitera que la decisión de certificación o descertificación, recae sobre el municipio, incluyendo al concejo municipal, y no sobre el alcalde exclusivamente.

Por la misma razón, este Despacho considera que no es de recibo la afirmación según la cual a la administración municipal de MONTERÍA no se le puede "castigar" por lo imposible, aunado esto al hecho, aceptado por el mismo recurrente en su escrito de reposición, de que fueron presentados proyectos de acuerdo tendientes a ajustar los porcentajes de contribución de conformidad con la Ley 1450 de 2011 y que finalmente estos fueron modificados a través de un acuerdo de 2016 (el cual no aplica para la vigencia de 2015 por lo ya expuesto). En consecuencia, advierte este Despacho que no era imposible para el municipio de MONTERÍA (incluidos en este la administración y el Consejo Municipal), proceder con la modificación de los porcentajes de contribución en los términos exigidos por la Ley.

En este entendido, este Despacho confirma como incumplido el requisito objeto de estudio, ya que como se demostró, el Municipio de Montería no expidió un acto administrativo con observancia de los porcentajes mínimos de contribuciones para la vigencia 2015, puesto que la falencia advertida sólo se superó hasta el año 2016; en este punto se insiste en que no se puede contemplar separadamente las actuaciones de la Alcaldía y el Concejo para calificar el requisito bajo estudio, toda vez que es el municipio el llamado a ajustarse a la Ley, la cual es manifiestamente imperativa y vinculante; así pues, resulta evidente que esta entidad no evalúa nada diferente a lo legalmente establecido, en función de la facultad meramente administrativa que la Ley 1176 del 2007, nos confiere.

Para finalizar, y con ocasión de esta última aseveración, es importante poner de presente, que el proceso de certificación reviste una función administrativa y no sancionatoria; es decir, el presente proceso no tiene como fin establecer o determinar responsabilidades por la violación al régimen de servicios públicos domiciliarios e imponer una consecuente sanción, sino que esta Superintendencia se limita a evaluar la información que el municipio reporta para acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto 1077 de 2015, lo que a la postre deriva en la certificación o descertificación.

Así, de llegarse a la conclusión de que el municipio no cumplió con los requisitos establecidos en la ley, los recursos del SGP – APSB destinados inicialmente al municipio descertificado, se transfieren al departamento respectivo para que este los administre. Vale aclarar que a pesar de que los recursos pasan a ser administrados por el ente departamental, este no puede variar la destinación inicial de los mismos, ya que es el encargado de realizar todas las gestiones necesarias para garantizar la prestación eficiente de los servicios esenciales de agua potable y saneamiento básico en todo el municipio. Por esta razón, dicho proceso no se entiende como una actuación sancionatoria que implique un daño o detrimento patrimonial para el municipio recientemente descertificado.

Como corolario de lo expuesto, se evidencia que el ente territorial no logró acreditar el requisito relacionado con el reporte en el SUI del acuerdo de subsidios y contribuciones y por lo tanto el recurso formulado por el señor Marcos Daniel Pineda García, como representante legal del Municipio de Montería, no prospera y en consecuencia la resolución recurrida será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo,

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR** la Resolución No. SSPD 20164010054825 del 30 de septiembre de 2016, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** personalmente de la presente Resolución al alcalde del Municipio de MONTERÍA del Departamento de CÓRDOBA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR**, una vez en firme, el contenido de la presente Resolución al gobernador del Departamento de CÓRDOBA, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicar en la página web de la SSPD.

**ARTÍCULO CUARTO.-** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

#### NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



**JULIÁN DANIEL LÓPEZ MURCIA**

Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Vanessa Benavides – Abogada contratista Grupo de Certificaciones e Información  
Juan David Pérez – Abogado contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo.  
Revisó: María Eugenia Sierra Botero – Coordinadora Grupo de Certificaciones e Información  
Carlos Andrés Bernal Casas – Abogado Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo.  
Expediente: 2016401351600605E